

Perú: golpe de Estado y resistencia popular



UNA MIRADA DESDE LA HISTORIA SOBRE EL PROCESO POLÍTICO QUE ANTECEDE AL DERROCAMIENTO DEL PRESIDENTE CASTILLO Y LA ACTUAL REPRESIÓN CONTRA EL PUEBLO PERUANO.

El 7 de diciembre de 2022 el Congreso de Perú votó la vacancia del presidente Pedro Castillo. Se trató de un verdadero golpe parlamentario, mediante el cual la derecha encabezada por el fujimorismo, con el apoyo de las fuerzas armadas, el Poder Judicial y los medios, logró finalmente derrocar a Castillo, arrestarlo y nombrar en su reemplazo a la hasta entonces vicepresidenta, Dina Boluarte. Pero conviene retroceder en el tiempo, para entender la coyuntura que enfrenta hoy el pueblo peruano.

El neoliberalismo en Perú

El modelo neoliberal se impuso en Perú en la última década del siglo pasado. A principios de 1990 el país se encontraba al borde del colapso, con una hiperinflación

galopante, una guerra civil interminable y una crisis de legitimidad de los partidos políticos Acción Popular (AP) y Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), que habían gobernado durante la década anterior. A su vez los movimientos sociales se encontraban en una situación de reflujo, motivada por la crisis económica y los efectos de los largos años de cruenta guerra civil y represión.

En ese contexto se realizaron las elecciones de 1990. Al agotamiento de los partidos políticos anteriormente mencionados, se sumó la división de la izquierda –que por entonces contaba con importante presencia electoral, habiendo ganado la alcaldía de Lima en 1983– al no poder elaborar una propuesta unitaria frente a la crisis económica y el conflicto armado. No extrañó entonces que llegaran al ballottage dos candidatos ajenos al sistema político: el ingeniero Alberto Fujimori y el escritor Mario Vargas Llosa. Fujimori se impuso por amplio margen, con un mensaje electoral en el que predicaba moderación en materia económica, ante

(El 5 de abril de 1992, Fujimori impulsó un autogolpe, que contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y las clases dominantes: suspendió la vigencia de la constitución, cerró el Congreso y dispuso el arresto de líderes opositores.

un rival que postulaba la aplicación de un ajuste ortodoxo de la economía.

Pero una vez en el gobierno, el ingeniero aplicó una brutal “terapia de shock”. Con el llamado “Fujishock”, del 8 agosto de 1990, se cortaron todos los subsidios a los precios de bienes y servicios, y se incrementaron la tasa de interés y los impuestos. Los precios de la gasolina y los alimentos, las tarifas de agua y electricidad, se triplicaron y hasta quintuplicaron. El control de la hiperinflación se obtuvo mediante un empobrecimiento sin precedentes de las mayorías populares.¹

El 5 de abril de 1992, Fujimori impulsó un autogolpe, que contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y las clases dominantes: suspendió la vigencia de la constitución, cerró el Congreso y dispuso el arresto

de líderes opositores. En septiembre de ese año se produjo la sorpresiva captura del jefe de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, que desencadenó el rápido desmantelamiento de la organización. La contención de la hiperinflación y el triunfo en la guerra contra Sendero, cimentaron la popularidad del mandatario, que le permitió aprobar, en 1993, una nueva Constitución Política.

El nuevo texto constitucional, redactado por una Convención electa en dictadura, y refrendado por un plebiscito fraudulento, se basa en la restricción de derechos, la concentración de poderes y la inclusión de un Capítulo Económico, que brindó el marco jurídico general para la implementación de las reformas neoliberales en el país. En los años siguientes se produjo la masiva privatización de las empresas públicas –especialmente las pertenecientes a los sectores petrolero, minero, de comunicaciones y electricidad–, la reanudación de los pagos de la deuda externa, la apertura de la economía y la reducción a la mitad de los empleados de la administración pública.²

Bajo la conducción de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos –jefe del siniestro Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)– se generalizó la corrupción, incubándose una verdadera mafia que colonizó las instituciones y los organismos del Estado, con el propósito de mantener la impunidad más allá de los gobiernos de turno. Se articuló un verdadero “poder paralelo y opaco”, que utilizaba el chantaje, los sobornos, las amenazas, las detenciones ilegales o directamente la desaparición o eliminación de personas para alcanzar sus fines.³

Uno de los principales objetivos de Fujimori fue cimentar la alianza con las fuerzas armadas, los medios y el Poder Judicial. La deriva autoritaria se complementó con el clientelismo político, mediante un sistema de créditos para comunidades urbanas y rurales⁴, y una amplia campaña ideológica, creando nuevos sentidos comunes. Se satanizó las ideas de justicia social, antimperialismo, soberanía nacional, derechos políticos y sociales de las mayorías, ensalzando la

iniciativa individual y la empresa privada, y presentando la informalidad como el punto de partida de un empresariado popular y próspero.⁵ En 1995 Fujimori obtuvo la reelección para un nuevo mandato presidencial, pero hacia fines de la década se inició la cuenta regresiva de la dictadura fujimorista, minada por los constantes escándalos de corrupción, los desbordes represivos, y el desgaste político. La situación decantó en noviembre de 2000, cuando Fujimori huyó al extranjero y fue destituido.

Un proceso sin rumbo

La característica del proceso peruano más reciente es que, tras la caída de Fujimori y su gobierno autoritario, no emergieron en Perú gobiernos pos-neoliberales, sino más bien todo lo contrario: las gestiones que en lo inmediato le sucedieron fueron una continuidad, en sus principales trazos, del proyecto neoliberal inaugurado a principios de los noventa.

Los gobiernos de Alejandro Toledo (2001–2006), Alan García (2006–2011) y

Ollanta Humala (2011–2016), mantuvieron la Constitución de 1993, y el modelo económico neoliberal, así como el papel dependiente del país como exportador de materias primas. Durante estas gestiones se implementaron los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, se reprimió a los movimientos sociales defensores del territorio y el medio ambiente, y se toleró la corrupción enquistada en la estructura estatal, involucrándose los elencos gobernantes en turbios negociados. El caso más paradigmático fue Humala, quien venció en la segunda vuelta de 2011 a Keiko Fujimori con un programa nacionalista, pero tardó menos de un año en traicionar sus compromisos electorales, y volcarse totalmente a la derecha.

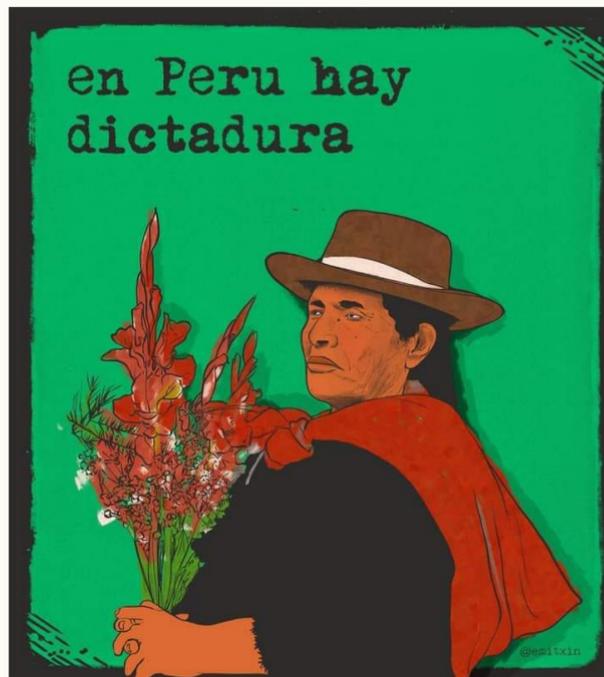
A partir del año 2016 se produjeron cambios importantes. En las elecciones presidenciales de ese año pasaron a segunda vuelta, por primera vez desde 1990, dos candidatos con propuestas neoliberales: Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. El fujimorismo selló su retorno a la política peruana, a pesar del amplio rechazo que

(El nuevo texto constitucional, redactado por una Convención electa en dictadura, y refrendado por un plebiscito fraudulento, se basa en la restricción de derechos, la concentración de poderes y la inclusión de un Capítulo Económico, que brindó el marco jurídico general para la implementación de las reformas neoliberales en el país.

genera su nueva lideresa, Keiko. La otra nota distintiva de esta elección fue la reaparición de la izquierda, liderada por Verónica Mendoza, que quedó en un tercer lugar con el 18,74% de los votos. Kuczynski ganó la segunda vuelta por escaso margen, con el apoyo de la izquierda, pero pronto su gestión se empantanó, ante la oposición del fujimorismo y sus aliados. Acusado de estar involucrado en grandes negociados, fue destituido a principios del 2018 por el Congreso y reemplazado por su vicepresidente Martín Vizcarra.⁶ En paralelo, las luchas populares se reanimaron. En 2017 estallaron fuertes luchas de los trabajadores mineros en el sur, y una masiva y prolongada huelga del magiste-

rio, en la cual apareció, por primera vez a nivel nacional, el dirigente Pedro Castillo. La llegada de la pandemia provocó una terrible crisis sanitaria: decenas de miles de muertos en los sectores populares, carencia de recursos sanitarios básicos y deficiencias en la vacunación.

En noviembre de 2020 se produjo un agravamiento de la crisis política, cuando el Congreso, disconforme con una propuesta de reforma política del Ejecutivo declaró, en otro "trámite express", la vacancia de Vizcarra, nombrando en su lugar a Manuel Merino, quien designó un gabinete ultra conservador. En esta oportunidad estallaron grandes movilizaciones populares, encabezadas por los estudiantes y la juventud limeña, repudiando el accionar del Congreso, fraccionado en pequeños partidos, dedicados a defender los intereses de actores privados de dudosa legitimidad. A pesar de la fuerte represión, con dos muertos y centenares de heridos y detenidos, la movilización popular obligó a Merino a renunciar, asumiendo Francisco Sagasti, legislador, quien convocó a elecciones en 2021.



(En 2017 estallaron fuertes luchas de los trabajadores mineros en el sur, y una masiva y prolongada huelga del magisterio, en la cual apareció, por primera vez a nivel nacional, el dirigente Pedro Castillo.

El ascenso de Pedro Castillo

Las elecciones presidenciales y parlamentarias del 21 de abril de 2021, se realizaron en un contexto signado por la profundidad de la crisis económica, la catástrofe sanitaria, crecientes y amenazantes protestas sociales, y un agravamiento de la crisis política, expresado en un arco partidario hiper-fragmentado, con un total de 18 candidaturas presidenciales formalizadas. Los dos candidatos que pasaron al ballotage no superaron el 20% de los votos: Pedro Castillo, de Perú Libre, obtuvo el 19%, y su rival, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, poco más del 13%. El voto nulo, en blanco, y el ausentismo rondaron el 40%. Cabe señalar que los partidos de derecha –liderados por Keiko, Rafael López Aliaga, Hernando de Soto y otras formaciones menores– totalizaron el 45% de los votos; frente a un total del 27%, obtenidos por Perú Libre (Castillo) y Juntos por el País (Verónica Mendoza).⁷ El armado político de Castillo se estructuró a partir de una alianza entre el magisterio rural y el partido político Perú Libre, una

organización de izquierda del centro del país, de la región de Junín, con ascendiente en las áreas rurales. Su propuesta política durante la campaña estuvo centrada en la mejora de la situación sanitaria, las condiciones de vida y el acceso a la educación en las áreas rurales, mediante una reforma impositiva con gravámenes a la renta minera y a las exportaciones, y la modificación de la Constitución de 1993. Castillo evadió definiciones tajantes sobre la mega-minería y los conflictos socio-ambientales, y expresó una ideología conservadora sobre las demandas de género y la diversidad sexual. Su campaña se centró en las áreas rurales, logrando desplazar dentro del campo de la izquierda, al frente dirigido por Verónica Mendoza, que terminó cayendo unos diez puntos en relación a su votación en el 2016. Es posible que este descenso esté relacionado con el apoyo de la izquierda a Kuczynski en la segunda vuelta de 2016, pero también hay que tener en cuenta las diferencias en torno a la cuestión de género, el medioambiente y la diversidad sexual,

temas muy controvertidos en Perú, especialmente en los ámbitos rurales donde la religiosidad popular es más intensa.

El ballottage del 6 de junio se realizó en un contexto de extrema polarización. Todos los partidos de derecha, los grupos económicos, los medios, la mayor parte de la intelectualidad liderada por Vargas Llosa, se alinearon detrás de Keiko, desarrollando una campaña racista, anticomunista y de *terruqueo* (como se denomina en Perú la asimilación a Sendero Luminoso y el terrorismo) contra Castillo y sus partidarios, en la que no se escatimó tampoco la violencia de los grupos de choque de ultra derecha. Sin embargo, la candidata neoliberal no pudo superar el alto rechazo que genera su figura, aun en sectores de las clases medias y medio-altas limeñas. Finalmente, Castillo se impuso en el ballottage con el 50,12 de los sufragios, frente al 49,87% de su rival (menos de 44.000 votos). Keiko ganó en Lima y en algunos distritos norteños, mientras Castillo recogió la mayor parte de su votación en la sierra sur, donde obtuvo más del 80%

(Todos los partidos de derecha, los grupos económicos, los medios, la mayor parte de la intelectualidad liderada por Vargas Llosa, se alinearon detrás de Keiko, desarrollando una campaña racista, anticomunista y de terruqueo (como se denomina en Perú la asimilación a Sendero Luminoso y el terrorismo) contra Castillo y sus partidarios.

de los votos, en lugares como Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, así como votaciones significativas en Moquegua, Huánuco y en Cajamarca, en la sierra norte, su lugar de origen.⁸

El ballottage del 6 de junio dejó al descubierto nítidas líneas clasistas e identitarias: la población blanco-mestiza de Lima y la costa, frente a las mayorías campesinas-indígenas del Perú profundo y rural.

Hacia el golpe de Estado

Como se dijo anteriormente, lo habitual en el Perú de las dos últimas décadas, es que los movimientos políticos que ganan las elecciones con una propuesta contestataria, una vez que llegan al Palacio se derechizan. Este no pa-

rece haber sido el caso de Castillo que, si bien desde la segunda vuelta electoral fue moderando su discurso, al asumir retomó las ideas centrales de su campaña.

En su discurso de asunción, Castillo reafirmó que sus prioridades eran mejorar la situación sanitaria de los sectores más vulnerables y aumentar el presupuesto educativo. El otro objetivo era insistir en la convocatoria a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución de 1993. Sostuvo también que la Constituyente debería ser plurinacional y con paridad de género, compuesta por candidatos surgidos de los partidos políticos y candidatos provenientes de los pueblos indígenas, nativos y originarios; del pueblo afroperuano; de candidaturas independientes provenientes de los gre-

(Castillo reafirmó que sus prioridades eran mejorar la situación sanitaria de los sectores más vulnerables y aumentar el presupuesto educativo. El otro objetivo era insistir en la convocatoria a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución de 1993.

mios de organizaciones populares y de la sociedad civil.

Pero a la vez, Castillo dejó claro que su intención era impulsar esta propuesta en el marco de la legalidad existente, mediante la negociación en el Congreso (donde su partido y la izquierda están en minoría) de un proyecto de ley para reformar el texto vigente. La clave pareciera estar, entonces, no en el abandono de sus propuestas, sino en la forma en que pretendía alcanzarlas, dentro del marco legal establecido y mediante la negociación con sus rivales políticos, sin apelar a la movilización popular. El resultado fue una gestión errática, cuyos constantes virajes e indecisiones fueron aprovechados por sus opositores.⁹

La derecha, encabezada por el fujimorismo, no estaba dispuesta a perder sus privilegios. Al principio desconoció los resultados electorales, aduciendo un supuesto fraude, desestimado ante la ausencia de sustento jurídico y probatorio. Luego inició, con la ayuda de los medios, una labor obstruccionista en el Congreso,

(La gestión de Castillo no buscó el apoyo de la movilización popular, y concluyó con una maniobra improvisada, aprovechada por sus enemigos para derrocarlo y arrestarlo. El repudio y la resistencia al golpe se extendieron rápidamente, especial, aunque no solamente, en la sierra sur.

con tres intentos de vacancia, constantes interpelaciones parlamentarias a ministros, y rechazo de los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. La acción de la derecha se combinó con las vacilaciones del gobierno, que fue postergando su agenda, en particular la convocatoria de una asamblea constituyente, para terminar con el congreso corrupto y reformar el sistema político. Se iniciaron así constantes recambios ministeriales (70 ministros en 500 días de gobierno), que desgastaron al gobierno, hasta que finalmente la derecha encontró la oportunidad de derrocar al Presidente, al intentar disolver el Congreso para frenar un pedido de vacancia. En suma, la gestión de Castillo no buscó el apoyo de la movilización popular,

y concluyó con una maniobra improvisada, aprovechada por sus enemigos para derrocarlo y arrestarlo.

El repudio y la resistencia al golpe se extendieron rápidamente, especial, aunque no solamente, en la sierra sur. Una vez más quedó en evidencia el racismo de las clases dominantes y las fuerzas militares, que no vacilaron en descargar una represión, sin límite alguno, sobre los manifestantes, con más de 70 muertos y centenares de heridos y detenidos. Las marchas sobre Lima mostraron las dos caras de Perú: las masas de la sierra y la población de la costa, por ahora más pasiva. En la población movilizada, en las organizaciones campesinas y las comunidades, y en el movimiento obrero que en forma desigual se sumó a la lucha, está muy instalada la demanda de una Asamblea Constituyente, para terminar con el sistema político corrupto y sus beneficiarios. El resultado de esta lucha es incierto, hay enormes dificultades por parte de los sectores movilizados para articular sus esfuerzos, pero tampoco se advierten

signos de una recomposición de los sectores dominantes que permita articular un bloque con pretensiones de construir hegemonía a mediano y largo plazo.

Juan Luis Hernández
Docente – Historiador UBA

Notas

1. Peter F. Klarén. *Nación y sociedad en la historia del Perú*, Lima, IEP, 2011, p. 491.
2. Nicolás Lynch. “La derecha peruana: de la hegemonía a la crisis (1990–2020)”, en Revista *CIDOB d’Afers Internacionals*, N.º 126, pp. 117–138. Diciembre 2020.
3. Henry Pease. *La autocracia fujimorista: del Estado intervencionista al Estado mafioso*. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013.
4. A tales efectos se fundó el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), enfocado en la financiación de micro-proyectos urgentes para comunidades urbanas y rurales.
5. Hernando de Soto. *El otro sendero*, Lima, Instituto Libertad y Democracia, 1989. De Soto fue uno de los fundadores, con Vargas Llosa, del Movimien-

to Libertad, luego fue asesor del gobierno de Fujimori.

6. El escándalo Odebrecht tuvo amplias repercusiones en Perú, derivando en el suicidio de Alan García, la prisión de Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, entre otras reconocidas figuras de la política y el empresariado.
7. Datos provenientes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
8. Datos provenientes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
9. El texto completo del discurso de Asunción de Castillo en: <https://www.nodal.am/2021/07/discurso-de-asuncion-de-pedro-castillo-como-presidente-del-peru/>